



Tortura

4

Balance de las recomendaciones anteriores

Alemania, Brasil, Chile, Eslovenia, España, Sri Lanka y Túnez en el anterior periodo hicieron un llamado al Estado colombiano para que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que aún no ha ratificado este instrumento. En el 2023 el Estado manifestó su voluntad de ratificar dicho tratado y este se encuentra en el trámite legislativo ante el Congreso de la República para su incorporación. La implementación adecuada de este instrumento a su vez implica que el Estado debe asegurar el establecimiento, funcionamiento y sostenibilidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la participación de la sociedad civil a lo largo del proceso.

Por otra parte, Argelia, Austria, Perú, Tailandia, Turquía, Venezuela y Zambia recomendaron al Estado tomar medidas para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención en cárceles. Sin embargo, parte del hacinamiento de los Establecimientos de Reclusión Ordinaria Nacional (ERON) se ha trasladado a los Centros de Detención Transitoria (CDT), donde la situación se sigue agravando (1).

El gobierno presentó a inicios del año 2023 un proyecto de ley que pretendía establecer procedimientos penales alternativos para reducir el hacinamiento en las cárceles. No obstante este proyecto fue archivado por falta de debate (2).

Desafíos

Los crímenes de tortura, tratos crueles e inhumanos han venido en incremento en Colombia. Entre 2017 y 2022 se documentaron 391 casos de tortura, al menos 31 eran mujeres y 4 NNA. Donde se conoce al presunto victimario el 58 % de los casos se atribuye al Estado, el 15,6 % a grupos paramilitares y el 5,6 % a guerrillas (3). Entre el 2017 y el 2022 se reportan 1.183 procesos penales abiertos, donde se imputa el delito de tortura; sin embargo, el 75% de los casos se encuentran en la etapa de indagación, el 8.19% en etapa de investigación, el 9.89 % del total de procesos por tortura se encuentran en etapa de juicio y solo 54 procesos que representan el 4,56% se encuentran en ejecución de penas (4).

Durante el 2019, 2020 y 2021 la tortura fue utilizada como un medio para reprimir la protesta. Se registraron 134 muertes producto del uso arbitrario de la fuerza, 80 casos de tortura durante detenciones administrativas o con fines de judicialización, 2.683 heridos producto del uso arbitrario y excesivo de la fuerza y 150 traumas oculares (5).

(1) Por ejemplo, en noviembre de 2022 se registraron 27 CDT con una ocupación superior al 1000%, y para abril de 2023 ese número aumentó a 34 establecimientos. Casi el 25% de las personas detenidas en estos centros llevan más de 12 meses en detención preventiva, y aún sin ser condenadas, pasan más de un año encerradas en celdas con un nivel de hacinamiento nunca antes visto. Ver CSST-388-Intervención-tutela-CDTs. Disponible en <https://bit.ly/3JL3AL7>

(2) Presidencia de la República de Colombia. El Gobierno Nacional enriquece proyecto de ley sobre humanización en las cárceles para presentarlo nuevamente en la próxima legislatura. 23 de junio de 2023. Disponible en: <https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/El-Gobierno-Nacional-enriquece-proyecto-de-ley-sobre-humanizacion-en-las-ca-230623.aspx>

(3) El año 2017 documentó 53 torturas; 2018 documentó 66; 2019, 85; 2020, 80; 2021, 82 y el primer semestre de 2022, 25. Información sistematizada y analizada por la Comisión Colombiana de Juristas, fuente: revistas Noche y Niebla números: 56, 58, 60, 62, 64 y 65. Disponibles en: https://www.nocheyniebla.org/?page_id=399.

(4) Fiscalía General de la Nación, dirección de política y estrategia (20.12.2022). Respuesta a derecho de petición presentado por la Comisión Colombiana de Juristas con número de radicado 20221400005171, oficio No. DPE-10200.

(5) CDLAT. Torturar y castigar a quien protesta, pág.8. Disponible en: <https://adobe.ly/44u4xPN>

Muchos de las prácticas constitutivas de tortura y TCID ocurrieron en centros de detención transitoria (Estaciones de Policía, Subestaciones de Policía, CAI, URI), las víctimas fueron trasladadas a estos lugares a través de la figura de “traslado por protección”; paradójicamente, el artículo 155 de la Ley 1801 del 2016, define este tipo de traslado como un medio material de policía, utilizado por el personal uniformado de la Policía Nacional, para salvaguardar la vida e integridad de las personas que se encuentran en riesgo o peligro.

Por otra parte, la tortura sigue siendo utilizada como una forma de sometimiento de la población carcelaria. En el sistema penitenciario colombiano se utilizan dinámicas como el uso arbitrario y excesivo de la fuerza, aislamientos prolongados, violencia sexual y tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de carácter psicológico. Estas prácticas suelen ser justificadas como un mal necesario para salvaguardar el orden interno y la seguridad de los establecimientos. Además, no hay suficiente formación del personal médico en contacto con personas privadas de libertad, ni programas de capacitación obligatoria para los jueces y fiscales para detectar casos de tortura, física como psicológica y malos tratos.

La tortura también es una agresión que se utiliza para acallar las voces de quienes defienden derechos y lideran causas sociales en Colombia. Las investigaciones judiciales contra estos crímenes avanzan lentamente y no se tiene en cuenta la utilización de actos de tortura y malos tratos como forma de control social y para sembrar terror en las comunidades, con lo cual es evidente que el Estado no ha respondido de manera objetiva ni eficiente a las recomendaciones realizadas en materia de investigación y sanción de las agresiones y además omite su deber de velar por la protección de la integridad física y el buen trato a las personas defensoras de DDHH, líderes y lideresas sociales.

Finalmente, no se aplican de manera consistente por todos los entes de justicia los estándares internacionales relacionados con la jurisdicción competente; la justicia penal militar todavía conoce sobre las presuntas violaciones de derechos humanos hechas por miembros de la Fuerza Pública. Además de ello, la tortura no se investiga en Colombia como un delito independiente, por lo que se subsume en la investigación de otras conductas.

Recomendaciones

1. Implementar adecuadamente el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura (OPCAT) posterior a su ratificación, asegurando particularmente el establecimiento, funcionamiento y sostenibilidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la participación de la sociedad civil a lo largo del proceso de establecimiento.
2. Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de torturas en contextos de protesta, así como a los responsables de represalias y actos de intimidación en contra de las víctimas y familiares que interponen denuncias sobre casos de tortura durante protestas.
3. Intensificar los esfuerzos encaminados a prevenir casos de uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes contra las personas privadas de libertad.
4. Investigar bajo la justicia ordinaria la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en concurso con otros actos delictivos, de tal manera que no se entienda subsumida en conductas de mayor penalización, y se pueda investigar de manera independiente frente a los demás delitos, permitiendo visibilizar la gravedad de esta violación e identificar los contextos en los que más ocurre.